



Consejo de Seguridad

Distr. general
14 de enero de 2002
Español
Original: inglés

Carta de fecha 11 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo

El Comité contra el Terrorismo ha recibido un informe del Perú, presentado en virtud del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Agradecería que tuviera a bien disponer que la presente carta y su anexo se distribuyeran como documento del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Jeremy **Greenstock**
Presidente
Comité contra el Terrorismo



Anexo

[Original: español]

Nota verbal de fecha 9 de enero de 2002 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por el Representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas

La Representación Permanente del Perú ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Departamento de Asuntos Políticos —Secretaría del Comité Especial contra el Terrorismo— y tiene a honra transmitir el informe del Gobierno del Perú referido a las medidas tomadas para la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad, de conformidad con el párrafo sexto del referido documento (véase el apéndice).

Apéndice

Informe del Gobierno del Perú referido al cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

En cumplimiento de la Resolución N° 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno del Perú informa lo siguiente:

Introducción

Desde inicios de los años 80 el Perú fue víctima de un grave fenómeno terrorista. El balance de dicho flagelo fue penoso por las más de 25 mil muertes ocasionadas y por las pérdidas económicas que ascendieron a más de 20 mil millones de dólares. La presencia del terrorismo en nuestro país implicó un serio elemento de inseguridad interna y significó, en términos reales, mayor pobreza y retroceso económico.

Por estas razones, el Perú es un país muy sensible en relación a este tema y comprende y apoya los esfuerzos de la Comunidad Internacional para conjugar y consolidar esquemas de cooperación entre los Estados para colaborar en la lucha contra este flagelo mundial.

Como respuesta a este problema interno, hace algunos años, el Perú desarrolló un marco jurídico que buscó enfrentar el fenómeno terrorista y lograr el objetivo de garantizar la seguridad interna, lo que finalmente se alcanzó luego de aplicar estrategias en los campos de seguridad y persecución delictiva que han tenido, en términos generales, un balance positivo debido a la captura de los principales cabecillas y a la desactivación de células terroristas, lo que ha permitido reducir este fenómeno a una mínima expresión. Sin embargo, debe señalarse que también se cometieron algunos excesos por parte de las fuerzas de seguridad, los mismos que luego de restaurada la democracia, son materia de investigación a través de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada recientemente, y por el Ministerio Público.

El Estado peruano, a inicios de los años 90 y con mayor fuerza desde 1992, instauró un sistema penal de emergencia, que buscó agravar las penas por actos de terrorismo, creando por primera vez en la historia de la República la pena de cadena perpetua para ciertos supuestos de actos terroristas. En general, se buscó un agravamiento de las modalidades en las que se juzgaban los actos terroristas y en las condiciones de carcerería, instaurándose centros penitenciarios de máxima seguridad, en los que fueron recluidos estos agentes terroristas.

El problema que se presenta en el país, no es el de una adecuación normativa que permita reprimir los actos terroristas y sus fuentes de financiamiento. Eso en gran parte, como se detalla más adelante, ya está dado. La tarea pendiente en el país es el buscar las salidas legales conducentes a una verdadera reconciliación, frente a las víctimas de actos terroristas y de los excesos de las fuerzas de seguridad, en el marco de un Estado democrático.

El Perú también ha venido desarrollando una acción internacional de alerta y condena a estos actos terroristas, advirtiendo de la peligrosidad de su eventual carácter transnacional y haciendo que la Comunidad Internacional promueva medidas de cooperación eficaces a efectos de un adecuado combate contra este flagelo.

El Terrorismo constituye un fenómeno que los peruanos hemos vivido como pocos países en el mundo. Por ello, su presencia y peligro latente continúa en la agenda del Estado como un problema a resolver, en la

perspectiva de generar un ambiente de paz, fraternidad y seguridad, que posibilite el desarrollo social y económico sostenible del País.

Tomando en cuenta lo anterior y las directrices establecidas por el Comité de Lucha contra el Terrorismo, se atiende a lo solicitado en los párrafos 1º, 2º y 3º de la citada Resolución 1373, de la siguiente manera:

Desarrollo

Resolución N° 1373, Párrafo Dispositivo 1:

Inciso a) ¿Qué medidas se han adoptado para prevenir y reprimir la financiación de los actos terroristas?

El Perú a través de la Resolución Legislativa N° 24811 del 12 de mayo de 1988, aprobó la "Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y Extorsión Conexa cuando éstos tengan Trascendencia Internacional", adoptada el 2 de febrero de 1971 en la ciudad de Washington D.C. y suscrito por el Perú el 8 de noviembre de 1984.

Asimismo, esta figura delictiva estaba prevista en el Código Penal, la misma que fue modificada por la Ley 24651 del 19 de marzo de 1987 y otras posteriores, las cuales fueron objeto de nuevas modificaciones con la expedición del Decreto Legislativo N° 635, de abril de 1991, que aprobó el Código Penal.

Esta normatividad fue a su vez modificada al poco tiempo, por la expedición del Decreto Ley N° 25475, del 5 de mayo de 1992, que establece la "Penalidad para los Delitos de Terrorismo y los Procedimientos para la Investigación, la Instrucción y el Juicio", en el que, entre otros aspectos, se previene y reprime la financiación de los actos terroristas. El referido Decreto Ley se encuentra vigente.

Dicho Decreto Ley, en su artículo 4, referido a los "Actos de Colaboración", señala:

"Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios, o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista".

Del mismo modo, el citado artículo define como actos de colaboración, entre otros supuestos:

"... cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas".

Este artículo es aplicable sólo a personas que no pertenecen al movimiento terrorista, debiendo entenderse que pasan a pertenecer al mismo cuando han prestado su colaboración de manera reiterada, en cuyo caso la penalidad es más severa.

Asimismo, mediante el Decreto Supremo N° 084-2001-RE, publicado el 6 de noviembre de 2001, el gobierno del Perú ratificó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo.

Inciso b) ¿Qué actividades enumeradas en este inciso están tipificadas como delitos en su país y a qué penas se condena la comisión de esos delitos?

Como se mencionó en el párrafo anterior, en el Perú "...cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas, será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 20 años".

Del mismo modo, a la fecha existe en nuestro Código Penal la tipificación que hace el art. 296-B, modificado por ley 27225 del 17 de diciembre de 1999, que contempla el lavado de activos proveniente del narcoterrorismo; siendo la condena a imponerse la de cadena perpetua.

Inciso c) ¿Qué Legislación y qué procedimientos existen para congelar cuentas y activos en bancos e instituciones financieras?

En el Perú, a partir del 14 de septiembre de 2000, se fueron denunciando graves hechos de corrupción en los más altos niveles de los poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. A nivel del Congreso de la República, Ministerio Público y Poder Judicial, se iniciaron investigaciones que presentaban limitaciones legales para su desarrollo; consecuentemente, se promulgaron nuevas leyes para dar eficiencia a las actuaciones que buscaban esclarecer los hechos de corrupción, y entre las medidas adoptadas, algunas guardan relación con las interrogantes planteadas en este inciso. Así tenemos:

- Ley No. 27379 "Ley de Procedimiento para Adoptar Medidas Excepcionales de Limitación de Derechos en Investigaciones Preliminares" (que contempla el delito de terrorismo) promulgada el 20 de diciembre de 2000.

La referida Ley, en su Art. 1º, *Ámbito de Aplicación*, señala: "La presente Ley está circunscrita a las medidas que limitan los derechos en el curso de investigaciones preliminares, de carácter jurisdiccional. Las medidas limitativas previstas en la presente Ley, podrán dictarse en los siguientes casos: "... (inciso 3) entre los que se encuentran los Delitos de Terrorismo previstos en el Decreto Ley 25475...". Se incluye dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, aquellos (delitos) que son cometidos por una pluralidad de personas o por organizaciones criminales cuando en su realización se haya utilizado recursos públicos o hayan intervenido funcionarios o servidores públicos o cualquier persona con el conocimiento o aquiescencia de éstos. También alcanza a los Delitos Contra la Administración Pública; Delitos Agravados; Delitos Aduaneros; Delitos Tributarios; siempre que dichos delitos se cometan por una pluralidad de personas o que el agente integre una organización criminal. Se incluyen además a los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas; *Terrorismo Especial*; Delitos Contra la Humanidad; Delitos Contra el Estado y la Defensa Nacional".

Luego de definirse el ámbito de aplicación en este artículo 1º, se especifican las medidas limitativas de derechos, durante las investigaciones preliminares, de la manera como sigue:

"Artículo 2º - Medidas Limitativas de Derechos- El Fiscal Provincial, en casos de estricta necesidad y urgencia, podrá solicitar al Juez Penal una serie de medidas limitativas de derechos, entre las que se menciona:

El Levantamiento del Secreto Bancario y de la Reserva Tributaria. "El Fiscal Provincial si decide solicitar estas medidas al Juez Penal, explicará las razones que justifiquen la necesidad de su imposición. El Juez Penal las acordará si resultan necesarias y pertinentes para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación. En caso de levantamiento del secreto bancario, la orden comprenderá las cuentas vinculadas con el investigado, así no figuren o estén registradas a su nombre. El Fiscal podrá solicitar al Juez el bloqueo e inmovilización de las

cuentas. Esta última medida no puede durar más de quince días y, excepcionalmente, podrá prorrogarse por quince días más, previo requerimiento del Fiscal Provincial y resolución motivada del Juez. En caso del levantamiento de la reserva tributaria, la orden podrá comprender las empresas o personas jurídicas que por cualquier razón están vinculadas al investigado y consistirá en la remisión al Fiscal de la información, documentos o declaraciones de carácter tributario."

Es menester, sin embargo, mencionar que la legislación vigente no contempla la posibilidad de congelar fondos y otros activos financieros dispuestos por organizaciones o entidades internacionales de los cuales el Perú forma parte, sin que exista un mandato judicial.

En ese sentido, el Gobierno peruano a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Superintendencia de Banca y Seguros, está promoviendo un proyecto de ley con miras a regular la forma en que deberían implementarse medidas de carácter preventivo sujetas a decisiones o resoluciones que sobre el particular emitan las entidades u organismos de carácter internacional como las Naciones Unidas, las mismas que serán entregadas a la brevedad al Congreso de la República.

Inciso d) ¿Qué medidas existen para prohibir las actividades enumeradas en este inciso?

Como se mencionó, el Decreto Ley No. 25475, tipifica en su Art. 4 los actos de colaboración, mediante el siguiente texto: "Art. 4°. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de veinte años, el que de manera voluntaria obtiene, recaba, reúne o facilita cualquier tipo de bienes o medios, o realiza actos de colaboración de cualquier modo favoreciendo la comisión de delitos comprendidos en este Decreto Ley o la realización de los fines de un grupo terrorista. Son actos de colaboración:

- a. Suministrar documentos e informaciones sobre personas y patrimonios, instalaciones, edificios públicos y privados y cualquier otro que específicamente coadyuve o facilite las actividades de elementos o grupos terroristas.
- b. La cesión o utilización de cualquier tipo de alojamiento o de otros medios susceptibles de ser destinados a ocultar personas o servir de depósito para armas, explosivos, propaganda, víveres, medicamentos y de otras pertenencias relacionadas con los grupos terroristas o con sus víctimas.
- c. El traslado a sabiendas de personas pertenecientes a grupos terroristas o vinculadas con sus actividades delictuosas, así como la prestación de cualquier tipo de ayuda que favorezca la fuga de aquéllos.
- d. La organización de cursos o conducción de centros de adoctrinamiento e instrucción de grupos terroristas, que funcionen bajo cualquier cobertura.
- e. La fabricación, adquisición, tenencia, sustracción, almacenamiento o suministro de armas, municiones, sustancias u objetos explosivos, asfixiantes, inflamables, tóxicos o cualquier otro que pudiera producir muertes o lesiones. Constituye circunstancia agravante la posesión, tenencia y ocultamiento de armas, municiones o explosivos que pertenezcan a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.
- f. Cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación hecha voluntariamente con la finalidad de financiar las actividades de elementos o grupos terroristas."

Es menester acotar que este artículo sólo es aplicable a los hechos cometidos en territorio peruano.

Resolución N° 1373, Párrafo Dispositivo 2:

Inciso a) ¿Qué legislación u otras medidas existen para dar efecto a este inciso? En particular ¿en qué figuras delictivas están encuadrados: i) el reclutamiento de miembros de grupos terroristas y ii) el abastecimiento de armas a los terroristas? ¿Qué otras medidas existen para ayudar a evitar esas actividades?

En el Perú, la ley 25475 contiene los principales tipos penales que reprimen el delito de terrorismo. Dicha Ley en su art. 5° reprime al autor por el simple hecho de pertenecer a una agrupación terrorista y en el art. 7° condena la apología al terrorismo; estos dos artículos buscan evitar el reclutamiento de terroristas. Además, se cuenta con el Decreto Ley N° 25880 que reprime la apología al terrorismo por parte de docentes o profesores, con miras a evitar que éstos influyan en sus alumnos.

La Ley 25475 en su art. 4°, inciso e), contempla como acto de colaboración: el abastecimiento de armas, explosivos, etc. con fines terroristas. Este artículo también reprime otro tipo de actos de colaboración. Debe indicarse que se trata de hechos criminales que se efectúen en territorio peruano.

Además, dentro de nuestra legislación existen figuras delictivas como la tenencia ilegal de armas, prevista en el art. 279° del Código Penal, que reprime la fabricación y tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, cuya pena va de 6 a 15 años de privación de la libertad.

Además, el 20 de setiembre de 1996, se promulgó el Decreto Legislativo No. 846 (que derogó al Decreto Ley N° 25643), mediante el que se prohíbe la libre importación y comercialización de nitrato de amonio, así como de los elementos que sirven para su elaboración, en cualquiera de sus fórmulas, presentaciones y denominaciones. La posesión no declarada o tenencia ilegal de nitrato de amonio, así como de los elementos que sirven para la elaboración de este producto y su utilización para actos de terrorismo, será pasible de denuncia penal y sancionado, según su gravedad, de conformidad con el Decreto Ley No. 25475. La Policía Nacional, con intervención del representante del Ministerio Público, adoptará las medidas preventivas para evitar o denunciar el ocultamiento de nitrato de amonio.

Del mismo modo, el 31 de agosto de 1992, se promulgó el Decreto Ley No. 25707 (regulado por el Decreto Legislativo 846 de 1996) –Declarando en emergencia a nivel nacional, la utilización de explosivos de uso civil y conexos- como parte de la estrategia antisubversiva, con el fin de incrementar las medidas de control en la fabricación, comercialización, transporte, almacenes, uso y destrucción de artefactos explosivos de uso civil y de los insumos utilizables en su fabricación. Se le encargó a la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, del Ministerio del Interior, establecer los mecanismos de control en coordinación con otras autoridades de otros Ministerios.

Así también, en septiembre de 1991, se aprobó el Decreto Legislativo 654 (Código de Ejecución Penal), en el que se establece que los internos por delitos de terrorismo o traición a la patria están exentos del beneficio de la reducción de la pena por trabajo o educación, lo que no implica que pierdan el acceso a los mismos.

Para efectos de aplicación de las medidas señaladas, la autoridad competente en el Perú es el Ministerio del Interior, que conforme lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 370, del 04 de febrero de 1986, es el organismo público rector de las actividades relacionadas con el Gobierno Interior, Seguridad Interna, Función Policial, Identificación, Movimiento Migratorio y Naturalización y cuenta en su estructura orgánica, con los siguientes órganos ejecutivos:

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR, órgano rector para el manejo de las Autoridades Políticas a nivel nacional. En el cumplimiento de sus funciones obtiene informaciones que son transmitidas a los órganos competentes para su manejo y explotación.

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES Y NATURALIZACIÓN, que tiene bajo su responsabilidad el control migratorio y los procesos de naturalización. A ésta se recurre para la obtención de informaciones que son necesarias para las investigaciones de personas nacionales o extranjeras, a fin de establecer su calidad y movimiento migratorio.

DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA, que es el órgano rector del Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior y representante del sector ante el Consejo Nacional de Inteligencia. Su finalidad es la de producir inteligencia estratégica para la Alta Dirección del Ministerio, dentro de la cual se incluye el manejo de informaciones por terrorismo.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERU, cuya finalidad es garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas.

Cuenta con Órganos de Ejecución (las Regiones Policiales), que son los órganos desconcentrados que permiten la cobertura policial en todo el ámbito territorial; y, con Direcciones Especializadas, que son los órganos técnico-normativo-ejecutivos en asuntos específicos; entre ellas, se tiene a la Dirección Contra el Terrorismo, encargada de la prevención, combate, investigación y denuncia del delito de terrorismo, de conformidad a las normas legales vigentes.

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL, que es la entidad de más alto nivel del control de los Servicios de Seguridad, el control y expedición de licencia para uso de armas, municiones y explosivos de uso civil.

Inciso b) ¿Qué otras medidas se están adoptando para prevenir la comisión de actos de terrorismo? Y, en particular ¿qué mecanismos de alerta temprana existen que permitan el intercambio de información con otros Estados?

La Dirección Contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú (PNP), antes mencionada, es la Dirección Especializada que interviene de oficio o a requerimiento de las Jefaturas de Región, con conocimiento y autorización de la Dirección General de la Policía, en todo el territorio nacional para tomar acciones relacionadas con la prevención, la investigación, el combate y la denuncia del delito de terrorismo. En el cumplimiento de sus funciones mantiene permanente coordinación con las otras Jefaturas Especializadas que funcionan en los niveles Regional, Departamental y Provincial.

Para la atención de casos relacionados al terrorismo internacional existe dentro de su estructura orgánica, la División de Terrorismo Internacional. La obtención de informaciones se difunde a nivel del Sistema de Inteligencia Policial, Sistema de Inteligencia del Ministerio del Interior y Sistema de Inteligencia Nacional.

Al tomarse conocimiento sobre informaciones que tienen relación con otros Estados, se llevan a cabo las coordinaciones del caso con las partes interesadas, realizándose previamente una evaluación para determinar si existen instrumentos jurídicos internacionales que aceleren los trámites respectivos, manteniéndose las gestiones pertinentes en calidad de reservadas.

Asimismo, en el Perú existe la Fiscalía Superior y Provincial para casos de terrorismo. A través de la Fiscalía Ad Hoc de Terrorismo se coordina, en forma permanente, con la Dirección Nacional contra el Terrorismo a efectos de investigar todos los hechos (tráfico de personas, falsificaciones de pasaportes, visas, tráfico de armas,

municiones, explosivos, etc.) que pudieran tener alguna relación con actividades destinadas a apoyar a grupos terroristas. Luego del 11 de setiembre del año en curso se ha ampliado la labor de prevención también a posibles actos de terrorismo internacional; siendo necesaria, para realizar dicha labor, la reforma de algunas leyes.

Inciso c) ¿Qué legislación o qué procedimientos existen para denegar refugio a los terroristas, como leyes para la exclusión o expulsión de los tipos de personas a que se hace referencia en este inciso?

En los puestos fronterizos y lugares de llegada y salida (Puertos y Aeropuertos) del Perú, existen oficinas de la Dirección General de Migraciones y Naturalización que ejercen el control de los nacionales y extranjeros que ingresan o salen del país. Esta información se coordina con las Subunidades de la Dirección de Policía Judicial de la Policía Nacional del Perú, Dirección Especializada que, entre otras funciones, se encarga de dar cumplimiento a los Mandatos Judiciales, con la finalidad de detectar a aquellas personas que por una u otra razón se encuentran solicitadas para su captura o detención y ser puestas a disposición de las autoridades judiciales. También se lleva un registro de los solicitados por Interpol.

La situación de los extranjeros durante su permanencia en el interior del país, es controlada por otra Dirección Especializada de la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Seguridad del Estado, a través de la División de Extranjería. Si en caso se detecta la permanencia irregular de algún ciudadano extranjero, éste es intervenido y puesto a disposición para su expulsión de conformidad a la Ley de Extranjería (aprobada por Decreto Legislativo N° 703, del 14 de noviembre de 1991).

Estos mecanismos administrativo-operativos constituyen los procedimientos normales de control. Si la Dirección Contra el Terrorismo tuviera interés especial o sospechas sobre algún extranjero, coordina con las Direcciones y/o Unidades Especializadas competentes y se establecen operaciones conjuntas especiales para realizar las intervenciones a que hubiera lugar.

Así también tenemos que el art. 30 del Código Penal contempla, para los extranjeros, como una de las penas accesorias a la pena privativa de la libertad, la de expulsión del país. Esta norma es aplicable a sentencias a imponerse por delito de terrorismo.

Además, el Reglamento que ordena la situación jurídica de los Refugiados y Asilados Políticos en el Perú (Decreto Supremo N° 001-85-RE), en su artículo 21° dispone que: "...no se consideran refugiados a los extranjeros respecto de quienes se tenga motivos fundados para considerar que en su país de origen, en el de su última residencia o en otro, han sido autores de grave delito común que debe ser perseguido internacionalmente, en forma especial los de terrorismo y narcotráfico."

Inciso d) ¿Qué legislación o qué procedimientos existen para impedir que los terroristas actúen desde su territorio en contra de otros Estados o de sus ciudadanos?

En el artículo 338° del Código Penal peruano se tipifica como "Delito que Compromete las Relaciones Exteriores del Estado", la práctica en territorio de la República, de actos destinados a alterar, por la violencia, la organización política de un Estado extranjero. En este caso, el autor puede ser reprimido con pena privativa de la libertad de hasta cinco años (conspiración contra un Estado extranjero). Por lo tanto, si los terroristas actúan en el territorio nacional para ejecutar actos de terrorismo en otros países, estarían comprendidos dentro de los alcances de esta Ley.

Además, el Decreto Ley No. 25475, al que ya se ha hecho referencia, contempla específicamente en su Art. 2° que comete delito de terrorismo el que "... realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio... o afecta las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y

del Estado...” Consecuentemente, el ordenamiento legal vigente faculta a la Policía Nacional a intervenir y dar parte al Ministerio Público a fin de proceder a denunciar a los terroristas cuando actúan en el territorio nacional.

Del mismo modo, debe hacerse referencia a las situaciones mencionadas el art. 5 del Decreto Ley 25475 que reprime la militancia en un grupo terrorista no haciendo distinción entre grupos nacionales o extranjeros.

La historia de la lucha antiterrorista en el Perú, registra, entre otros casos, que en 1987, en la playa de Pucallana-Lima, se intervino y capturó a tres altos dirigentes de la organización terrorista “Alfaro Vive Carajo” de la República del Ecuador. Éstos no cometían actos de terrorismo en el Perú, pero utilizaban el territorio peruano para eludir la acción de la justicia ecuatoriana. Además, se estableció que mantenían relaciones con la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).

Inciso e) ¿Qué medidas se han adoptado para tipificar los actos de terrorismo como delitos graves y velar para que su castigo corresponda a la gravedad de esos actos de terrorismo?

El citado Decreto Ley No. 25475, al que ya se ha hecho referencia líneas arriba, establece la penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.

Sin embargo, unos meses después de haberse promulgado este Decreto Ley, el 12 de Agosto de 1992, se promulgó el Decreto Ley No. 25659, mediante el cual se regula el Delito de Traición a La Patria, figura delictiva que constituye una forma agravada de terrorismo. En su Artículo 1º dispone: “Constituye Delito de Traición a la Patria la comisión de actos previstos en el Artículo 2º del Decreto Ley No. 25475, cuando se emplean las modalidades siguientes:

- a) Utilización de coches bomba o similares, artefactos explosivos, armas de guerra o similares que causen la muerte de personas o lesionen su integridad física o su salud mental o dañen la propiedad pública o privada, o cuando de cualquier otra manera se pueda generar grave peligro para la población.
- b) Almacenamiento o posesión ilegal de materiales explosivos, nitrato de amonio, o los elementos que sirvan para la elaboración de este producto o proporcionar voluntariamente insumos o elementos utilizables en la fabricación de explosivos para su empleo en los actos previstos en el inciso anterior”.

En el Artículo 2º del citado Decreto Ley 25659, se señala: “Incorre en Delito de Traición a la Patria:

- a) El que pertenece a un grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla u otro equivalente.
- b) El que integra grupos armados, bandas, pelotones de aniquilamiento o similares de una organización terrorista, encargados de la eliminación de personas.
- c) El que suministra, proporciona, divulga informes, datos, planes, proyectos y demás documentación o facilita el ingreso de terroristas en edificaciones y locales a su cargo o custodia, para favorecer el resultado previsto en los incisos a) y b) del artículo anterior.”

En su artículo 3º se señala que la pena aplicable al delito de traición a la patria es la cadena perpetua, establecida en el inciso a) del Decreto Ley No. 25475, aplicable en el caso que el agente pertenezca al grupo dirigencial de una organización terrorista, sea en calidad de líder, cabecilla, jefe, secretario u otro equivalente, a nivel nacional, sin distinción de la función que desempeñe en la organización. Asimismo, si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares, de una organización terrorista, encargados de la eliminación física de personas o grupos de personas, indefensas, sea cual fuere el medio empleado.

Entre las personas condenadas a Cadena Perpetua, figuran: Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso (a) “Presidente Gonzalo”; Elena Albertina Iparaguirre Revoredo (a) “Camarada Miriam”, máximos dirigentes de la

Organización Terrorista “Sendero Luminoso”; Víctor Polay Campos (a) “Comandante Rolando” y Peter David Peabody Cárdenas Schulte (a) “Gringo”, máximos dirigentes de la Organización Terrorista MRTA. En los Establecimientos Penales del Perú, hay un total superior a trescientos ochenta internos varones y más de cincuenta mujeres, sentenciadas a cadena perpetua.

Sobre el particular, es el Ministerio Público, como conductor de las investigaciones preliminares, el que interviene desde un inicio en los casos que se presentan por esta figura delictiva. En el presente año se han abierto 515 investigaciones, habiéndose incrementado luego del 11 de setiembre del año en curso.

Inciso f) ¿Qué procedimientos y mecanismos existen para proporcionar asistencia a otros Estados?

En el ámbito internacional, el Perú ha suscrito una serie de acuerdos con algunos Estados para facilitar acciones de coordinación y de intercambio de informaciones. Sin embargo, aún cuando no exista acuerdo con el Estado involucrado, el Perú puede actuar basado en el principio de reciprocidad internacional.

Entre los Acuerdos existentes, podemos mencionar los siguientes:

- Con Colombia, el "Convenio sobre asistencia judicial en materia penal", suscrito en Lima el 12 de julio de 1994.
- Con Venezuela, el "Convenio sobre ejecución de sentencias penales", suscrito en Caracas el 12 de enero de 1996.
- Con los Estados Unidos, el "Tratado de extradición", suscrito en julio del 2001.
- Con Canadá el "Tratado de asistencia judicial en materia penal", suscrito el 27 octubre de 1998; también tenemos el "Tratado de extradición con Gran Bretaña", suscrito en 1904 y aplicable al Canadá como miembro de la Comunidad Británica de Naciones; pudiendo mencionarse también el "Tratado sobre ejecución de sentencias penales", suscrito en abril de 1980.
- Con Guatemala, el "Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal", suscrito el 16 de abril de 1998.
- Con El Salvador, el "Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal", suscrito el 13 de junio de 1996.
- Con Cuba, el "Acuerdo de Asistencia Judicial en materia penal", suscrito el 15 de febrero de 1999.

Como se ha mencionado, en el Perú se han capturado a terroristas de otros países y se han coordinado acciones con las respectivas Embajadas, a nivel de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la ejecución de acciones de gobierno a gobierno.

Asimismo, miembros de la Policía Nacional del Perú han viajado al extranjero para coordinar aspectos operativos contra el terrorismo. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en Bolivia, en 1995 con ocasión del secuestro del Ex Ministro de Industrias de ese país, en el que tuvieron participación elementos de la Organización Terrorista “MRTA”, operativo que culminó con la captura del 80% de los responsables. Luego, en 1997, el intercambio de informaciones entre Perú y Bolivia, permitió la captura en ese país de Junzo Okudaira, integrante del Ejército Rojo Japonés.

En la práctica, en el combate contra el terrorismo, se llevan a cabo frecuentes intercambios de información, a nivel internacional, por medio de la INTERPOL.

Inciso g) ¿De qué forma impiden la circulación de terroristas los controles fronterizos en su país? ¿De qué forma apoyan esa tarea sus procedimientos para la emisión de documentos de identidad y de viaje? ¿Qué medidas existen para evitar su falsificación?

Existe en el Perú un sistema de control migratorio. En los grandes centros poblados se cuenta con una infraestructura relativamente adecuada, como la existente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

Estos controles se ejercen para impedir la circulación de terroristas en el ingreso y salida del Perú. Sin embargo, son un tanto limitados, pues en muchos casos se realizan por chequeo manual por parte de los Funcionarios de Migraciones. Asimismo, la Policía Nacional del Perú cuenta con un listado (en algunos lugares informatizado y en otros es un listado físico manual) sobre las personas que se encuentran solicitadas, con órdenes de captura o de detención por parte de las Autoridades Judiciales y por Interpol.

En el pasado se han descubierto organizaciones criminales dedicadas al tráfico de migrantes, que burlan los controles fronterizos, dan protección en el interior del territorio y hasta facilitan la formalización de documentos y/o dan facilidades para el traslado a otros países. Estas redes criminales son las que eventualmente podrían ser utilizadas por los terroristas para poder ingresar, permanecer y salir del Perú.

También se tiene conocimiento de que las organizaciones terroristas cuentan con “Centros de Documentación”, donde se falsifican documentos que posibilitan el cambio de identidad, la condición migratoria, e incluso, llegan a utilizar esos documentos falsos para obtener, por medios legales, otros documentos expedidos oficialmente.

Otra modalidad utilizada por los terroristas es la obtención de documentos falsificados o adulterados. Recuerdese que en 1995, la terrorista del Ejército Rojo Japonés de apellido Akita, capturada en Rumanía, portaba un pasaporte peruano a nombre de María Yamamura, el cual había sido expedido oficialmente, pero fue posteriormente robado, en la ciudad de Lima - Perú.

Los pasaportes peruanos son fabricados contando con los elementos de seguridad aceptados internacionalmente, pero las limitaciones presupuestarias aún no permiten establecer un control sistematizado al 100%, lo cual hace que los controles puedan ser vulnerados.

Cabe señalar que actualmente, al igual que en otros lugares del mundo, en Sudamérica se encuentran en marcha varios procesos de integración que promueven la creación de Mercados Comunes con el consecuente libre tránsito de personas, medida que dificultaría un estricto control de los movimientos migratorios entre países vecinos, lo que obligará a tomar medidas conjuntas para evitar la circulación de elementos terroristas.

Resolución N° 1373, Párrafo Dispositivo N° 3

Incisos a), b) y c): ¿Qué medidas se han adoptado para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional en las esferas indicadas en estos incisos?

No se han adoptado medidas específicas en adición a las ya existentes. Además, el Perú reitera su disposición de cooperar con las Naciones Unidas en todo lo que esté a su alcance, tal como lo expresará el señor Presidente de la República en la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que se ha concretado con la elección del coronel Benedicto Jiménez como miembro del Grupo de Expertos que asesorará al Comité de Lucha contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad.

Asimismo, el Ministerio del Interior, a través de sus Direcciones Generales, específicamente de la Policía Nacional del Perú; de Migraciones y Naturalización, y de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas,

Municiones y Explosivos de Uso Civil, están en aptitud de proporcionar informaciones y prestar su cooperación, tanto en el ámbito administrativo como operativo, cuando así sea solicitado.

Inciso d) ¿Cuál es la intención de su gobierno acerca de la firma y ratificación de los Convenios y Protocolos a que hace referencia en este inciso?

El Perú, con ocasión de la participación del señor Presidente de la República en el Debate General del 56º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha cumplido con depositar los instrumentos de ratificación de los siguientes instrumentos internacionales: "Convenio para la represión de los Atentados Terroristas cometidos con Bombas" y "Convenio para la Represión de la Financiación del Terrorismo", con cuyos depósitos, ha ratificado los 12 Convenios que, hasta la fecha, se han promovido en el seno de las Naciones Unidas.

Inciso e) Facilite cualquier información pertinente sobre la aplicación de los Convenios, Protocolos y resoluciones a que se hace referencia en este inciso

El gobierno peruano se encuentra promoviendo la legislación interna pertinente a efectos de dar cabal cumplimiento a todos los Convenios Internacionales y resoluciones del Consejo de Seguridad, en materia de terrorismo.

Inciso f) ¿Qué legislación, procedimientos y mecanismos existen para asegurarse de que los solicitantes de asilo no hayan participado en actividades terroristas antes de conceder el estatuto de refugiado?

Mediante la citada Ley de Extranjería (Decreto Legislativo N° 703), se establecen las normas para el ingreso, permanencia, residencia y control de extranjeros en el territorio de la República y se regula su situación jurídica en el mismo. En los artículos 29º y 30º de la mencionada Ley, se prohíbe el ingreso al país de los extranjeros prófugos de la justicia y que se encuentren procesados en el extranjero por delitos tipificados como comunes en la legislación peruana, que merezcan prisión o penas de mayor gravedad, como es el caso del delito de terrorismo.

Inciso g) ¿Qué procedimientos existen para evitar que los terroristas abusen del estatuto de refugiado?

La misma Ley de Extranjería regula en su artículo 44º que el Ministerio de Relaciones Exteriores, previa calificación y de conformidad con la Ley y con los convenios vigentes para la República, podrá otorgar la calidad de asilado político y refugiado a los extranjeros que la soliciten y determinará la pérdida de la misma. Asimismo, existe un Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio del Interior en lo relativo a la Dirección General de Migraciones y Naturalización, en donde se detallan entre otros procedimientos, el de control migratorio de ingreso y salida de extranjeros.

Lima, 7 de enero de 2002